



Este documento se ha obtenido directamente del original, que contenía todas las firmas auténticas, y se han ocultado los datos personales y los códigos que permitían acceder al original.

Dirección General de Inversiones
y Desarrollo Local
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y
ADMINISTRACIÓN LOCAL

Exp.: A/SER-023743/2023

MUNICIPIO: Pelayos de la Presa

ACTUACIÓN: "Rehabilitación urbanización de calles". Redacción de Proyecto.

PROGRAMA: Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el periodo 2022-2026

ASUNTO: Tramitación anticipada y urgente. Procedimiento abierto simplificado. Pluralidad de criterios.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 29.367,17 euros (IVA incluido).

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 24.270,39 euros.

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS EXTREMOS EXIGIDOS EN EL ARTÍCULO 116.4 DE LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO (LCSP), DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN DENOMINADA "REHABILITACIÓN URBANIZACIÓN DE CALLES" EN PELAYOS DE LA PRESA.

Mediante la presente memoria se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 116.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que establece que:

"4. En el expediente se justificará adecuadamente:

- a) La elección del procedimiento de licitación.*
- b) La clasificación que se exija a los participantes.*
- c) Los criterios de solvencia técnica o profesional, y económica y financiera, y los criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato, así como las condiciones especiales de ejecución del mismo.*
- d) El valor estimado del contrato con una indicación de todos los conceptos que lo integran, incluyendo siempre los costes laborales si existiesen.*
- e) La necesidad de la Administración a la que se pretende dar satisfacción mediante la contratación de las prestaciones correspondientes; y su relación con el objeto del contrato, que deberá ser directa, clara y proporcional.*
- f) En los contratos de servicios, el informe de insuficiencia de medios.*
- g) La decisión de no dividir en lotes el objeto del contrato, en su caso".*

1. PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN

Conforme a lo previsto en el artículo 159.1 LCSP, los órganos de contratación podrán acordar la utilización de un procedimiento abierto simplificado en los contratos de obras, suministro y servicios cuando se cumplan las dos condiciones siguientes:

- a) Que su valor estimado sea igual o inferior a 140.000,00 euros en el caso de contratos de servicios (art. 22.1 a) LCSP).

- b) Que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderación no supere el veinticinco por ciento del total, salvo en el caso de que el contrato tenga por objeto prestaciones de carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura, en que su ponderación no podrá superar el cuarenta y cinco por ciento del total.

En el caso de la contratación que se propone se dan conjuntamente estos dos requisitos, ya que el valor estimado, calculado de acuerdo con el artículo 101 LCSP asciende a la cantidad de **24.270,39 euros**, siendo, por tanto, inferior a la cantidad de 140.000,00 euros, y, además, no se prevé ningún criterio de adjudicación evaluable mediante juicio de valor, por lo que procede la contratación siguiendo el procedimiento abierto simplificado.

2. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

La naturaleza del servicio es de carácter intelectual, tal como reconoce la Disposición Adicional cuadragésima primera LCSP, con los efectos que se derivan de las previsiones contenidas en la ley, como los apartados 3.g) y 4 del artículo 145, que establecen que en los contratos de servicios que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura, el precio no podrá ser el único factor determinante de la adjudicación, y que los criterios relacionados con la calidad deberán representar al menos el 51% de la puntuación asignable en la valoración de las ofertas.

No todo servicio de arquitectura es de carácter intelectual por el simple hecho de pertenecer a este sector; si bien, en este caso concreto sí se considera así por el objeto del contrato de redacción del proyecto (la rehabilitación-urbanización de calles), con un carácter creativo e innovador que no se limita al cumplimiento de exigencias técnicas o normativas.

En consecuencia, la adjudicación del contrato se llevará a cabo utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación, en base a la mejor relación calidad-precio conforme al artículo 145 LCSP, representando el criterio económico el 49% del total y el criterio relacionado con la reducción de plazo de redacción del Proyecto, el 51% restante.

En el criterio relacionado con la reducción de plazo de redacción del Proyecto, dado que el plazo máximo propuesto para la redacción se establece en 3 meses, para asignar la puntuación se concederán 8,5 puntos por cada semana de reducción con un máximo de hasta 51 puntos.

Los criterios de adjudicación valorables mediante la aplicación de fórmulas que se han elegido son los siguientes:

1. Precio ofertado: hasta 49 puntos.

El criterio precio se valorará de acuerdo con la siguiente fórmula, que pone en relación cada oferta con las restantes, otorgando 49 puntos a la oferta más baja, y asignando la puntuación al resto de ofertas proporcionalmente:

$$\text{Puntuación} = \frac{49 \times \text{Baja a valorar}}{\text{Mayor baja ofertada}}$$

Siendo la baja la diferencia entre el precio base de licitación y la oferta presentada. Se ha optado por esta fórmula, porque distribuye de manera directamente proporcional los 49 puntos en función de las ofertas presentadas, otorgando 49 puntos a la oferta más baja.

2. Reducción del plazo de redacción del proyecto: hasta 51 puntos.

Siendo de 3 meses (12 semanas) el plazo máximo para la redacción del proyecto, se otorgarán 8,5 puntos por cada semana de reducción del plazo, hasta un máximo de 51 puntos.

Total criterios adjudicación: 100 puntos

De los criterios objetivos establecidos anteriormente, se tomará en consideración a efectos de apreciar, en su caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, el señalado con el número 1, ya que dicho criterio es el único que se considera relevante para determinar la viabilidad de la oferta del licitador considerada en su conjunto. Para apreciar dicha circunstancia se estará a lo dispuesto en el art. 149 LCSP y en el art. 85 del Reglamento General de La Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCSP) y el Informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado 21 de octubre de 2019.

Por lo tanto, se considerarán desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 unidades porcentuales.
2. Cuando concurren dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.
3. Cuando concurren tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

4. Cuando concurren cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.
5. Excepcionalmente, y atendiendo al objeto del contrato y circunstancias del mercado, el órgano de contratación podrá motivadamente reducir en un tercio en el correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares los porcentajes establecidos en los apartados anteriores.
6. Para la valoración de las ofertas como desproporcionadas, la mesa de contratación podrá considerar la relación entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada.

En cuanto a la documentación técnica a presentar por los licitadores en relación con los criterios de adjudicación del contrato será el Anexo I: Modelo de Oferta del Pliego de Cláusulas Particulares, en el que se expresará el precio y la reducción del plazo de redacción del proyecto.

No se establecen parámetros para considerar la oferta anormalmente baja en relación con el criterio de reducción del plazo de redacción del proyecto al no ser éste un factor determinante que pudiera comprometer la viabilidad de la oferta. Asimismo, la asignación de puntos ya contiene un límite, al asignarse 8,5 puntos por cada semana de reducción.

3. CLASIFICACIÓN

La clasificación no es un requisito exigible al tratarse de un contrato de servicios, de conformidad con el artículo 77.1.b) LCSP. Asimismo, al no estar su objeto comprendido en el Anexo II del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, solo se puede acreditar la solvencia mediante la acreditación de los requisitos exigidos en los pliegos y en el anuncio de licitación.

4. CRITERIOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y TÉCNICA Y PROFESIONAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.4 a) LCSP, todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través de este procedimiento simplificado deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o cuando proceda de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 96 en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, en la fecha final de presentación de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia. A estos efectos, también se considerará admisible la proposición del licitador que acredite haber presentado la solicitud de inscripción en el correspondiente Registro junto con la documentación preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de

presentación de las ofertas. La acreditación de esta circunstancia tendrá lugar mediante la aportación del acuse de recibo de la solicitud emitido por el correspondiente Registro y de una declaración responsable de haber aportado la documentación preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanación.

Atendiendo a las características y al valor estimado del contrato, la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica y profesional de los licitadores, deberá acreditarse conforme a lo previsto en los artículos 87 y 90 LCSP.

En la presente memoria se justifican los criterios de solvencia y su acreditación, quedando así fijada la solvencia con precisión, relacionada con el objeto e importe del contrato, sin que produzca efectos de carácter discriminatorio. Los criterios utilizados son ponderados y proporcionales al importe del contrato, sin que se excluya a empresarios capacitados para la ejecución del mismo.

A continuación, se exponen los criterios de solvencia que se consideran más adecuados, dadas las características del contrato.

4.1 SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA

Los licitadores podrán acreditar su solvencia económica y financiera mediante el criterio señalado en el apartado a) del artículo 87.1 de LCSP, referido al volumen de negocio.

De conformidad con lo previsto en el artículo 87.1 a) LCSP, la solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por el volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. El volumen de negocios mínimo anual exigido no excederá de una vez y media el valor estimado del contrato, excepto en casos debidamente justificados como los relacionados con los riesgos especiales vinculados a la naturaleza de las obras, los servicios o los suministros. El órgano de contratación indicará las principales razones de la imposición de dicho requisito en los pliegos de la contratación o en el informe específico a que se refiere el artículo 336.

Criterios de selección

El volumen de negocios anual de la empresa, referido al año del mayor volumen de negocio de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas, exigiéndose un nivel mínimo de 36.405,58 euros (al menos, una vez y media el valor estimado del contrato).

Acreditación documental

Presentación de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil o en aquel en el que deban estar inscritas, lo que se acreditará mediante certificado del Registro correspondiente, y cuando se trate de empresarios individuales no inscritos, los libros individuales y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. Se acompañará de una declaración responsable del empresario relativa al volumen anual de negocios.

4.2 SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL

Para acreditar la solvencia técnica y profesional se ha optado por los medios establecidos en el apartado e) del artículo 90 LCSP, que regula la solvencia técnica en los contratos de servicios.

Atendiendo a la complejidad técnica de los trabajos a desarrollar, se considera necesario que el equipo técnico encargado de la ejecución de los mismos esté formado por técnicos con la titulación adecuada, y que cuenten con la suficiente experiencia en trabajos de similares características a los que constituyen el objeto del contrato, lo cual redundará en beneficio de la calidad del trabajo realizado. Esta experiencia mínima necesaria se ha concretado, para el profesional designado como proyectista, en haber redactado al menos 3 proyectos, siendo el presupuesto de ejecución material (PEM) de las obras cuyos proyectos ha redactado como mínimo igual al PEM de la obra objeto del contrato, que asciende a la cantidad de 587.578,45 euros.

En consecuencia, la solvencia técnica o profesional queda redactada como sigue:

Art. 90.1. apartado e) LCSP: “Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del responsable o responsables de la ejecución del contrato, así como de los técnicos encargados directamente de la misma, siempre que no se evalúen como un criterio de adjudicación.”

Criterios de selección

El licitador deberá acreditar que el equipo facultativo responsable de la ejecución del servicio está compuesto, como mínimo, por:

- Un profesional, redactor del proyecto, con una experiencia profesional de redacción de al menos 3 proyectos de similares características, cuyo presupuesto de ejecución

material de cada uno de los proyectos, sea igual o superior al PEM estimativo de la obra, de 587.578,45 euros.

Para determinar que un trabajo o servicio es de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto del contrato, en defecto de previsión en el pliego, se atenderá a los tres primeros dígitos de los respectivos códigos de la CPV.

Acreditación documental

Se aportará declaración responsable firmada por el representante legal de la empresa en la que figure nombre, apellidos y titulación del proyectista y relación de proyectos redactados de similares características. Esta declaración se acompañará de:

- Copia de la titulación universitaria expedida por la Universidad.
- La experiencia profesional deberá acreditarse mediante "curriculum vitae", donde vengan detallados los proyectos realizados. Se deberá incluir declaración responsable de la empresa licitadora sobre la veracidad de los datos del curriculum.
- Certificados de buena ejecución emitidos por las entidades promotoras de los trabajos realizados, o documentos de los colegios oficiales que acrediten la efectiva ejecución del trabajo realizado, con mención del PEM de las obras.

Compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios personales y materiales: Sí.

Como complemento de la solvencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 76.2 LCSP, y atendiendo a la complejidad técnica y al carácter intelectual de las prestaciones objeto del contrato, el licitador que resulte propuesto adjudicatario deberá comprometerse a adscribir a la ejecución del contrato al profesional proyectista del equipo técnico presentado para acreditar la solvencia técnica.

Este compromiso quedará integrado en el contrato, atribuyéndose el carácter de obligación esencial, cuyo incumplimiento será causa de resolución del contrato, a los efectos previstos en el artículo 211.1.f) de la LCSP.

5. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

Para dar cumplimiento al artículo 202 de la LCSP, y con la finalidad de mantener o mejorar los valores medioambientales que puedan verse afectados por la ejecución del contrato, se establece como condición especial de ejecución de carácter medioambiental que el adjudicatario realice su trabajo a través de documentos electrónicos o en papel reciclado, con un mínimo 85% de fibras reutilizadas y con proceso de blanqueado completamente libre de cloro, o de fibra virgen procedente de bosques de gestión sostenible (con certificado de explotación forestal sostenible tipo FSC, PEFC o equivalente).

Esta condición se acreditará mediante declaración responsable del representante de la empresa que presentará al responsable del contrato cuando le sea requerido.

La condición especial de ejecución será igualmente exigible a todos los subcontratistas que participen en la ejecución del contrato.

Esta condición especial de ejecución no supone incremento del coste del contrato y tendrá la consideración de **esencial** y su incumplimiento constituirá causa de resolución del contrato a los efectos de lo dispuesto en el artículo 211.1.f) de la LCSP.

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Los honorarios que perciben los arquitectos o ingenieros por sus trabajos profesionales en España están liberalizados, quedando sujetos al libre acuerdo entre el técnico y el cliente. Además, desde 2009 con la entrada en vigor de la Ley Ómnibus (Ley 25/2009), los Colegios Profesionales no pueden establecer baremos orientativos de honorarios profesionales.

La ejecución de un trabajo de ingeniería o arquitectura es de notable complejidad, y se suelen movilizar cuantiosos recursos materiales, así como a profesionales o empresas dependientes del contratista principal. El sostenimiento de este sistema con unos buenos niveles de calidad requiere que el precio pagado sea adecuado a esa complejidad.

No se dispone de unas tarifas oficiales para la prestación de este tipo de servicios, por lo que en esta Memoria Económica se trata de hacer una valoración lo más detallada y justificada posible. Para la realización de este contrato con la necesaria efectividad se requiere personal técnico especializado, así como los medios técnicos precisos para que este personal cualificado pueda realizar sus tareas.

No obstante, conviene precisar que trabajar por debajo del coste, sin beneficio, está considerado “competencia desleal”, según se establece el apartado c) del artículo 17 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.

El órgano contratante, en virtud de lo anterior toma como referencia y tiene en cuenta, para el desglose de costes de este contrato y establecimiento de un precio de mercado, los siguientes aspectos:

☐ Costes de Referencia y Baremos publicados.

Se puede acreditar la existencia de Costes de Referencia en el Colegio de Arquitectos de Madrid, de Granada, de Castilla la Mancha, Vasco-Navarro, Málaga, tarifas SEGIPSA (Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio SA), Servicio Vasco de Salud (Álava), Sociedad Provincial de Desarrollo de Valladolid S.A., Ayuntamiento de Madrid, Ayuntamiento de Valladolid, Ayuntamiento de Bilbao, etc., y admitiendo que los baremos no son obligatorios, no sería lógico que la base de licitación se aleje ostensiblemente de estos mínimos aconsejados, que de hecho siguen funcionando como referencia para el mercado

privado. Los gastos directos (empleados y colaboradores, consultores, desplazamientos, avales, etc.) e indirectos (instalaciones, seguros, medios técnicos, etc.) suponen una carga muy fuerte, que incluso se prolonga por motivos de responsabilidad legal muchos años más allá de la finalización de un trabajo. Unos precios muy por debajo de los recomendados ponen en entredicho la viabilidad del contrato.

En todos los documentos citados anteriormente, los honorarios corresponden a obras de edificación, por lo que no se ajustan a la tipología de trabajo (Obra Civil) del Proyecto de "Rehabilitación Urbanización de Calles".

Del mismo modo que para la elaboración del presupuesto de los contratos de obras son de uso habitual las Bases de Precios de la Construcción, como por ejemplo la Base de Precios Centro Guadalajara, con el fin de aportar claridad y facilitar la tarea de los diferentes técnicos intervinientes en el proceso constructivo, también se entiende lógico emplear para definir el coste de los Gastos Asociados a la ejecución de la obra indicada en el encabezamiento, los baremos orientativos de Honorarios de los Colegios Profesionales de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos (CICCP) y de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas (CITOP).

Se hace constar que estos baremos no pueden utilizarse para establecer una cantidad mínima de honorarios, después del sometimiento de los colegios profesionales al derecho de la competencia. La razón de su utilización, en este caso, se justifica en la necesidad de calcular un importe, de la forma más objetiva posible, que sirva de referencia al procedimiento de licitación que se lleve a cabo para la contratación del mencionado servicio.

ESTIMACIÓN DE LOS HONORARIOS

El cálculo de los honorarios máximos para la licitación del contrato de dirección facultativa se elabora teniendo en cuenta una serie de factores que adecúan su importe a la realidad del proceso siguiendo un método uniforme que garantice la viabilidad de su ejecución y tomando en cuenta los siguientes parámetros:

- ☐ El tipo de trabajo (Proyecto de reforma, remodelación o reparación).
- ☐ Trabajo parcial o completo.
- ☐ La complejidad del proyecto.
- ☐ Tipo de obra: Obras y servicios urbanos. (Remodelación casco Urbano).

A este respecto, se plantea la siguiente estimación de honorarios máximos:

La presente valoración se realiza según los baremos orientativos para la estimación de honorarios del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en el ejercicio de su profesión.

Por tanto, la formulación utilizada para el cálculo de los honorarios de Redacción de Proyecto es:

$$H = PEM \times Ca \times Cb$$

Siendo:

PEM: presupuesto de ejecución material reducido (PEMR1+PEMR2). Según tabla de cálculo de PEMR; PEMR1: 0. PEMR2: 569.951,10.

ERMR: 569.951,10 €

Ca: coeficiente cálculo por tipo de trabajo, redacción de proyecto de reforma, remodelación o reparación

Cb: coeficiente cálculo por tipo de obra, Obras y Servicios Urbanos (urbanización)

Presupuesto de Ejecución Material (PEM) del proyecto; "Rehabilitación Urbanización de Calles": PEM=587.578,45 euros.

Presupuesto de Ejecución Material Reducido (PEMR) del proyecto; "Rehabilitación Urbanización de Calles": PEM=569.951,10 euros.

Coeficiente según el tipo de trabajo (Ca); en este caso "Rehabilitación Urbanización de Calles" (código 05 según baremo de honorarios del CICCIP): Ca=1,20.

Coeficiente según el tipo de obra a ejecutar (Cb); en este caso "Urbanización" (código 12.10 según baremo de honorarios del CICCIP): Cb=0,04.

12. OBRAS Y SERVICIOS URBANOS		
12.01	Campos y pistas de deportes, piscinas y otras instalaciones deportivas y de ocio	0,040
12.02	Cementerios	0,040
12.03	Cerramientos de fincas	0,030
12.04	Instalaciones telefonía móvil	0,040
12.05	Ordenación de tráfico en núcleos urbanos	0,050
12.06	Parques y jardines	0,040
12.07	Pavimentaciones	0,040
12.08	Plazas y espacios libres	0,040
12.09	Redes de distribución gas y electricidad	0,040
12.10	Urbanizaciones	0,040 (a)

(a) Si la urbanización es completa, incluyendo pavimentaciones, redes de distribución de agua, eléctrica o gas, redes de alcantarillado, alumbrado, jardinería y restantes servicios, se aplicará además un coeficiente reductor de 0,8.

En el caso del tipo de obra "Urbanizaciones" (código 12.10 según baremo honorarios CICCIP), cuando estas obras incluyan la urbanización completa, incluyendo pavimentaciones, redes de distribución de agua, eléctrica o gas, redes de alcantarillado, alumbrado, jardinería y restantes servicios aplicará además un coeficiente reductor de 0,8. Sin embargo, no es el caso que nos ocupa pues en la Memoria Técnica Valorada presentada por el Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada, en su apartado "Descripción de las Obras", no se contempla actuación alguna sobre los servicios existentes.

Por tanto, los honorarios máximos estimados para la Redacción del Proyecto (HRP) serían de:

$$\text{HRP} = 569.951,10 \times 1,20 \times 0,04 = 27.357,65 \text{ euros.}$$

Aplicando el correspondiente 21% en concepto de IVA, el Presupuesto máximo del contrato para la Redacción del Proyecto resulta:

$$\text{HRP} = 27.357,65 \times 1,21 = 33.102,76 \text{ euros.}$$

Por lo tanto, se considera coherente el valor estimado incluido IVA de 29.367,17 €, como propuesta para el Presupuesto de la Redacción del Proyecto incluido en los Gastos Asociados de la actuación: *“REHABILITACIÓN URBANIZACIÓN DE CALLES” en el municipio de Pelayos de la Presa*”.

Además tal y como se indica en el informe técnico para la estimación de los gastos asociados para la redacción del proyecto del expediente, de fecha 30 de mayo de 2023, la determinación del importe propuesto se analiza a partir del cálculo de unos baremos orientativos, establecidos por los Colegios Profesionales, que sirven exclusivamente de referencia para la estimación de unos honorarios máximos, si bien, con la entrada en vigor de la Ley Ómnibus (Ley 25/2009), estos honorarios están liberalizados, quedando sujetos al libre acuerdo entre el técnico y el cliente.

Por otra parte, al amparo de lo establecido en el Artículo 12.2 del Decreto 118/2020, de 23 de diciembre, de Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se aprueba el "Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período 2021-2025, en el que se cita; **“Dichas altas serán solicitadas por el órgano municipal competente, teniendo en cuenta el ente gestor, la cofinanciación y la determinación del importe, en el que necesariamente deberán incluirse el gasto correspondiente a la ejecución material de la inversión y los gastos asociados que correspondan a la misma”**, se entiende que le corresponde al Ayuntamiento la cuantificación de dichos gastos asociados, siempre enmarcados dentro de las recomendaciones establecidas en la propia solicitud de alta de la actuación para este tipo de proyectos (6-9 % del Presupuesto Base de Licitación y 2.000 €). Cabe recordar la dificultad añadida y el grado de incertidumbre que supone la estimación de los honorarios profesionales para la redacción de un proyecto a través de la imputación de tiempos de dedicación de las diferentes disciplinas/trabajos que pueden intervenir en la elaboración del mismo, ya que no es posible conocer con exactitud el alcance económico de dichos trabajos con anterioridad al diseño definitivo del proyecto, esto es; el diseño de la solución definitiva (trabajo eminentemente intelectual que depende de las habilidades profesionales del autor del proyecto y de sus colaboradores, y de las complejidades que se vayan encontrado en el proceso de definición del diseño), definición topográfica y geotécnica (donde la magnitud de sus estudios puede provocar considerables ajustes sobre la solución definitiva), determinación precisa de los servicios afectados por las obras, encaje y cálculo de las estructuras, estudios del drenaje, entre otros.

Por tanto, el alcance de todos estos trabajos, desconocido e imprevisible a priori en una fase inicial a la redacción del proyecto, es representativo de un mayor o menor coste en su redacción.

En vista de todo lo anterior y ante la inexistencia de un procedimiento reglamentado que justifique de forma realista y objetiva, la determinación del precio de un contrato de servicio para la redacción de proyecto, resulta necesario recurrir, desde el punto de vista técnico, a la estimación del valor máximo del contrato de redacción mediante fórmulas de aproximación en función de la magnitud de la obra a construir, establecidas en los baremos de honorarios de carácter orientativo de los colegios profesionales, sin necesidad de suscribir por los

técnicos de este Área de Infraestructuras Locales un documento justificativo que contenga una serie de datos ficticios para concluir en una cifra exacta ya prevista de antemano por el órgano municipal en su solicitud de alta de la actuación.

En este sentido, una vez estimados estos honorarios máximos y comprobada la coherencia del gasto asociado estimado por el ayuntamiento, se entra a valorar, en la medida de lo posible, otros factores en virtud del análisis técnico que se desprende de la propia revisión del proyecto. Esto permite evaluar la complejidad y tipología de los trabajos a realizar en la redacción del mismo. Esta redacción contempla únicamente actuaciones propias de urbanización (que precisan pocos recursos en su redacción), sin que intervengan cálculos y estudios pormenorizados que contengan circunstancias particulares, que son los que consumen muchos recursos en la redacción del proyecto, y elevan su cuantía, lo que nos permite considerar aceptable el importe propuesto por el Ayuntamiento de Pelayos de la Presa, para este caso.

Este importe, además, se adecúa a una realidad de mercado, basada en resultados de procesos semejantes de licitación en otras actuaciones de similares características.

No se prevé expresamente la posibilidad de modificar el contrato, ni tampoco su prórroga, de ahí que el valor estimado del contrato, definido en el artículo 101 LCSP para los contratos de obras, suministros y servicios como el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero según sus estimaciones, es de 24.270,39 euros.

El plazo de ejecución previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas es de 3 meses.

Teniendo en cuenta los plazos de tramitación para la licitación del presente contrato de servicios, se prevé como fecha de inicio el mes de abril de 2024.

El gasto se efectuará con cargo al Presupuesto General de la Comunidad de Madrid para el año 2024, imputándose a la aplicación presupuestaria G/942N/62900 y al proyecto de gasto 2023/000985.

7. JUSTIFICACIÓN DE LA NO DIVISIÓN EN LOTES

De conformidad con lo establecido en el artículo 99.3 LCSP, el objeto del contrato no permite la división en lotes, ya que la realización independiente de los diversos documentos comprendidos en el proyecto constructivo dificultaría la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico. Asimismo, la necesidad de coordinar las diferentes prestaciones del mismo, podría verse imposibilitada en caso de ejecutarse de manera independiente por distintos contratistas.

8. NECESIDAD DE SEGURO

En la propuesta de contratación y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se incluye la exigencia a la empresa que resulte adjudicataria de suscribir una póliza de seguro de responsabilidad civil, incluida la Responsabilidad Civil Profesional, para hacer frente a las reclamaciones derivadas de la actividad objeto del contrato.

La suma asegurada será, como mínimo, de:

- 100.000,00 euros por víctima
- 100.000,00 euros por daños materiales

El seguro deberá mantenerse vigente durante el tiempo de vigencia del contrato y el período de garantía. Tendrán la condición de asegurados el adjudicatario como persona jurídica o física y como asegurados adicionales, la Consejería de Administración Local y Digitalización y el personal de la misma que intervenga en el contrato, sin que pierdan su condición de terceros. El seguro deberá cubrir la responsabilidad civil por los hechos acaecidos durante el período de vigencia del contrato de seguro y cuya reclamación se efectúe hasta dos años después de su finalización.

Dicho seguro actuará en primera instancia ante cualquier reclamación derivada de la ejecución de los trabajos objeto del contrato.

La empresa adjudicataria podrá extender el presente contrato al contrato de seguro de responsabilidad civil que ya tuviese concertado, siempre que quede cubierta la cantidad asegurada indicada en las condiciones exigidas, y así se acredite mediante certificación expedida por la compañía aseguradora.

Cuando los licitadores concurren en UTE el seguro habrá de ser suscrito por la UTE o por las empresas que la compongan y, en ambos casos, por la totalidad del importe exigido.

El certificado de seguro correspondiente deberá aportarse antes de la formalización del contrato, en el que deberá especificarse la cobertura objeto de la presente contratación en las condiciones, como mínimo, establecidas en esta cláusula.

Si bien, el adjudicatario debe constituir una garantía definitiva en favor de la Administración, esta cubre, a tenor de lo dispuesto en el artículo 110 LCSP, los siguientes conceptos:

- a) De la obligación de formalizar el contrato en plazo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153.
- b) De las penalidades impuestas al contratista conforme al artículo 192 de la presente Ley.

- c) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato incluidas las mejoras que ofertadas por el contratista hayan sido aceptadas por el órgano de contratación, de los gastos originados a la Administración por la demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y de los daños y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecución del contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolución.
- d) De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, de acuerdo con lo que en él o en esta Ley esté establecido.
- e) Además, en los contratos de obras, de servicios y de suministros, la garantía definitiva responderá de la inexistencia de vicios o defectos de los bienes construidos o suministrados o de los servicios prestados durante el plazo de garantía que se haya previsto en el contrato.

Sin embargo, el objeto del contrato de seguro de responsabilidad civil, es otro, como se ha expuesto.

El centro gestor entiende que el aseguramiento de dicha responsabilidad coadyuva a la mejor satisfacción del interés de la Administración en la ejecución del contrato y en la protección de terceros que eventualmente puedan resultar perjudicados por la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato. Por estas razones, se considera apropiado exigir al contratista que celebre un contrato de seguro de responsabilidad civil.

9. INFORME DE INSUFICIENCIA DE MEDIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS

La Dirección General de Inversiones y Desarrollo Local no cuenta con medios personales suficientes, ni a nivel de volumen ni de especialización. La dedicación del personal técnico con el que cuenta la Subdirección General de Proyectos de Inversión en Municipios no es factible dado el perjuicio que ello ocasionaría a las actividades que ya tiene encomendadas. Por ello, no es posible acometer los trabajos objeto del presente contrato con empleados públicos adscritos a la citada Subdirección, resultando imprescindible acudir a la contratación externa mediante un contrato de servicios que ponga a disposición los medios necesarios para la redacción del proyecto, bajo la supervisión de la Subdirección.

En Madrid, el día de la fecha

**EL DIRECTOR GENERAL DE INVERSIONES
Y DESARROLLO LOCAL**

Firmado digitalmente por: MIRANDA DE LARRA ARNAIZ ALEJO JOAQUÍN
Fecha: 2023.08.16 11:29